

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **LUZ MARÍA GIL DE RAMOS**
Demandado : **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -E.S.U.- Y MUNICIPIO DE MEDELLÍN**
Radicado : **05001-31-05-009-2015-00538-01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Laboral individual -Contrato de trabajo, prestaciones sociales, prescripción-
Decisión : Modifica decisión condenatoria
Sentencia N° : 171

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRERZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Se solicita declarar que el entre la demandante Luz María Gil de Ramos y la Empresa para la Seguridad Urbana -E.S.U.- existió una relación laboral entre el 1° de abril de 2009 y el 30 de abril de 2011, fecha ésta última en que fue terminado el vínculo por las codemandas. En consecuencia, se condene a las codemandadas de manera conjunta, solidaria o separada al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: cesantías; intereses sobre las cesantías, primas de navidad y de vacaciones; vacaciones, indemnización por despido injusto; reembolso de la retención en la fuente; el reembolso de los aportes a la seguridad social en salud y pensiones realizado por la demandante; sanción moratoria del Decreto 797 de 1949; la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990; intereses moratorios o en subsidio la indexación y pago de las Costas del proceso.

Subsidiariamente, en el evento de no acogerse la petición de que la relación laboral fue con la Empresa para la Seguridad Urbana -E.S.U.-, se solicita se declare que dicho vínculo fue con el Municipio de Medellín.

Hechos relevantes de la demanda:

Afirma el apoderado de la parte demandante, que la señora Luz María Gil de Ramos, ingresó a laborar con Metroseguridad -hoy Empresa para la Seguridad Urbana- el primer de abril de 2009; prestando sus servicios hasta el 30 de abril de 2011, fecha en la cual, sin que mediara justa causa se dio por terminada la relación laboral. Indica que su mandante prestó sus servicios en el centro de Medellín, bajo las órdenes e instrucciones indicadas en el contrato de prestación de servicios; de manera personal, bajo subordinación, cumpliendo un horario; todo ello controlado y supervisado por la E.S.U., a través de los señores Lina Sañudo, Froilán Zuluaga y Juan Carlos Sierra, quienes eran supervisores y dependientes de esa entidad; la cual le suministraba las herramientas de trabajo. Agrega que en el año 2009 devengó un salario de \$1.210.810,00 y en los años 2010 y 2011 \$1.210.000,00. Asegura que las

codemandadas han omitido el pago de todos los conceptos que se solicitan en las pretensiones formuladas en la demanda.

Respuestas a la demanda:

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado de la demanda, el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN dio respuesta a través de apoderada judicial¹**, indicando que no le constan los hechos de la demanda, por lo que solicita la prueba de los mismos. Sostiene que el contrato de prestación de servicios celebrado por la demandante, fue suscrito con la E.S.U. no con el su mandante.

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de fondo que denominó: prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación; no causación de prestaciones ni vínculo laboral en contratos de prestación de servicios; falta de legitimación en la causa por pasiva; ausencia de nexo de causalidad y ausencia de responsabilidad; caducidad de la acción y compensación.

Y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -E.S.U.-**, dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial²; indicando que la señora Luz María Gil de Ramos no trabajó al servicio de su mandante y explicó que a la demandante se le elaboró un contrato de prestación de servicios, previa solicitud escrita por parte del Municipio de Medellín-subsecretaría de espacio público, prestando sus servicios a esta entidad no a la E.S.U. Explicó que las codemandadas suscribieron varios convenios interadministrativos de administración delegada de servicios, por medio de los cuales su mandante se comprometió a realizar el apoyo logístico al ente territorial, el cual es el único obligado por disposiciones legales y constitucionales a la defensa y control del espacio público; siendo por tanto el objetivo específico, según los convenios, suplir los requerimientos que el Municipio le realizaba, los cuales se concretaban en el clausulado indicado en el convenio. Indica que la contratación del personal se

¹ Folios 269 a 287.

² Folios 289 a 323.

realizaba conforme oficio enviado a la E.S.U. por el Municipio de Medellín-subsecretaria de espacio público, en cual se indicaba el nombre del contratista, cédula, objeto contractual, honorarios, plazo y modalidad contractual; procediendo su mandante a realizar el respectivo contrato de prestación de servicios. Asegura que no hubo terminación unilateral del contrato, sino finalización del plazo establecido en el contrato; que su mandante no dirigió, ni supervisó, ni coordinó a la demandante, ya que los servicios los prestó fue a la subsecretaria de espacio público.

De acuerdo a lo anterior, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito, que denominó: inexistencia de relación laboral frente a la E.S.U.; existencia de convenios interadministrativos de administración delegada de recursos, celebrado entre la E.S.U. y el Municipio de Medellín; ineficacia de la cláusula de exclusión de la relación laboral con el Municipio de Medellín; buena fe de la Empresa para la Seguridad Urbana y prescripción.

Sentencia de Primera Instancia:

Mediante Sentencia el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín **declaró que la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante Luz María Gil de Ramos y la Empresa para la Seguridad Urbana -E.S.U.-**, antes Metroseguridad; entre el 1° de abril de 2009 y el 30 de abril de 2011; **condenando a la E.S.U. pago de los siguientes conceptos:** cesantías \$2.701.724,00; por intereses a las cesantías \$17.067,00; por vacaciones compensadas la suma de \$1.260.406; por prima de navidad \$525.173,00; por indemnización por despido injusto \$6.060.000,00; a reembolsar el valor correspondiente, al porcentaje sobre el salario mínimo legal vigente entre 2009 y el 2011, que canceló la demandante y que correspondía pagar al empleador; a reajustar lo pagado por concepto de aportes a la seguridad social en salud y pensión, para el año 2009 entre la suma de \$497.000,00 y \$1.210.000,00; para el 2010 entre \$515.000,00 y \$1.210.000,00 y para el 2011 entre 535.600,00 y \$1.210.000,00; a reconocer a título de sanción moratoria a partir del día 91 posterior a

la terminación del vínculo laboral y hasta el pago efectivo de lo adeudado por los conceptos anteriores, la suma de \$40.333,00 diarios. **Declaró solidariamente responsable del pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones al Municipio de Medellín; Absolvió a las codemandadas de las demás pretensiones formuladas en la demanda. CONDENÓ en COSTAS a cargo de las entidades demandadas y en favor de la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.362.955,00.**

Recursos de Apelación:

Inconformes con la decisión anterior, los apoderados de la parte demandante, formularon sendos recursos de Apelación, así:

El apoderado de la demandante Luz María Gil de Ramos, manifiesta que ninguna de las prestaciones debió ser afectada por la prescripción, ya que en los casos en que se discute la existencia de una relación laboral por un contrato realidad, la prescripción sólo se cuenta a partir de la fecha del despido; tal como se ha indicado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-084 de 2010 y en Sentencia del 23 de mayo 2001, Radicado 15350 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; solicitándose se tengan en cuenta, las doceavas para la liquidación de las cesantías, los intereses a las cesantía, primas de navidad y vacaciones.

Indica que, en caso de considerarse no hubo mala fe de la demandada y no hay lugar a la sanción moratoria, se condene a la indexación de las condenas; teniendo en cuenta que, contrario a lo indicado por el *a quo* para el año 2009 cuando fue contratada la demandante, ya había decisiones judiciales del año 2008 que establecían que los contratos de prestación de servicios no era el medio para vincular personal.

Solicita se modifique el valor de las agencias en derecho, toda vez que si las pretensiones están a la fecha en aproximadamente \$125.000.000,00, por salir avante casi la totalidad de las pretensiones, las Costas deben ser entre un 20 y un 25%, o sea unos \$25.000.000,00.

Por su parte el apoderado de la Empresa para la Seguridad Urbana - E.S.U.-, indicó en su recurso de Apelación, que no está de acuerdo con que se concluyera **que el empleador** de la señora Luz María Gil de Ramos **fuera la E.S.U.**; toda vez que si bien se suscribieron varios contratos de prestación de servicios entre Metroseguridad -hoy E.S.U.- y la actora, lo cierto es que ello se hizo por expresa delegación y mandato del Municipio de Medellín; tal como se constata en la prueba documental, en que se le indica a su mandante cuál es el personal que debe vincular y en qué cargos; sin que sea cierto que el Municipio y Metroseguridad hoy E.S.U., son lo mismo o que el ente territorial lo creó para vincular personal, pues esta última es una empresa industrial y comercial del Estado que tiene plena autonomía legal, tiene su propio patrimonio y organigrama; sin que sea cierto que su mandante sea un contratista independiente y que realizó con sus propios recursos una labor del objeto social del Municipio, ya que lo cierto es que los recursos son de éste último y se entregan a la E.S.U. para su administración, sin tener autonomía para vincular al personal, siendo simplemente un intermediario y un empleador de la demandante.

Aduce que no está de acuerdo con se hubiera resuelto que la vinculación de la demandante fue una sola y a término indefinido, ya que la realidad es que existieron varios contratos de prestación de servicios, con diferentes fechas de inicio y terminación y con solución de continuidad entre uno y otro; debiéndose entender existieron diferentes contratos, sin demostrarse con respecto al último contrato la fecha de terminación, siendo ello carga probatoria de la parte actora; además que hay mala fe del demandante al fraccionar la vinculación, ya que la demandante fue clara en indicar que ella continuó prestando el servicio en la misma

labor y simplemente le dijeron que era con otras entidades y en la actualidad tiene una demanda en contra de la E.S.U., en el mismo despacho, con radicado 2016-00735.

Así mismo afirma no debió tomarse el último salario para la liquidación de cesantías, ya que el régimen de las mismas es el anual y por tanto debe tomarse el salario de cada año; estando demostrado por la parte actora sólo el salario del último año de \$1.210.000,00, por lo que sólo se podía liquidar ese período por falta de prueba de los salarios de los años 2009 y 2010. **Agrega que el argumento anterior debe tenerse en cuenta igualmente, frente a la condena al reajuste de los aportes a la seguridad social en pensiones y salud,** para lo cual se tuvo en cuenta por todo el tiempo el mismo salario; que en las pretensiones de la demanda no se solicitó el reajuste de los aportes a la seguridad social como se hizo en la Sentencia, sino que la pretensión era el reembolso de lo que ella canceló y que correspondía pagar a la entidad, por lo que en virtud del principio de congruencia el Juez de instancia no puede proferir esa decisión, teniendo en cuenta que en este caso no se cumplen los presupuestos de las facultades extra petita, sin demostrarse los salarios de los años 2009 y 2010, por lo que no procede el reajuste, además que ello no fue motivo de discusión en el trámite del proceso, por lo que no puede haber una condena a reajuste.

Discrepa de la condena a la indemnización por despido injusto en razón a que no se demostró que la relación laboral terminó efectivamente el 30 de abril del año 2011, pues la misma continuó según se establece del otro proceso, sin que por tanto proceda una condena de indemnización por despido, al no demostrarse la fecha de terminación del vínculo, no existiendo manera de contabilizar el plazo presuntivo de seis meses.

Sostiene frente a la condena a la sanción moratoria, no comparte la decisión del despacho de considerar era carga del supuesto empleador demostrar la buena fe en su omisión de pagar las prestaciones, ya que ello va en contravía de los principios constitucionales que rigen la teoría de contratación de los

negocios jurídicos y del mismo espíritu constitucional del ser humano, debiéndose presumir que su actuar siempre es de buena fe; siendo claro en este caso el actuar de buena fe de la E.S.U. en el trámite de la contratación, sin demostrarse por la parte demandante la mala fe de la entidad.

Alegatos de Conclusión:

El apoderado de la demandante Luz María Gil de Ramos, solicita se confirme la condena a la indemnización moratoria al haber existido mala fe de la entidad demandada al efectuar la contratación de la demandante mediante contratos de prestación de servicios y demostrarse que efectivamente lo que existió en realidad entre las partes fue un contrato de trabajo, lo que da lugar a que se reconozcan a su mandante todas sus prestaciones sociales.

Por su parte, el apoderado del Municipio de Medellín, reitera en sus alegatos de conclusión los argumentos esgrimidos al contestar la demanda, indicando además que no hay lugar a la condena solidaria, toda vez que en los convenios interadministrativos suscritos entre el Municipio de Medellín y la E.S.U., se reguló cabalmente la ausencia de responsabilidad del Municipio de Medellín, en relación con la contratación que llevaría a cabo la E.S.U. a fin de conseguir el cumplimiento del objeto contractual, por lo que estos tenían plena autonomía. Agrega que no puede operar el criterio de beneficiario del servicio a favor de la Subsecretaría del Espacio Público o al Municipio de Medellín, por cuanto fue la E.S.U. la que de manera autónoma, realizó un contrato de prestación de servicios a fin de dar cumplimiento al objeto establecido en el contrato interadministrativo, ello sumado a la autonomía técnica, patrimonial, jurídica y administrativa de la E.S.U. que debe impedir que la declaratoria de la existencia de la relación laboral se haga extensiva al ente territorial, sin que por tanto pueda la demandante hacerse acreedora a ningún beneficio salarial, ni prestacional, dado que no ha existido ninguna relación laboral con el Municipio de Medellín, según se desprende de la simple lectura de los argumentos

expuestos en la demanda y del debate probatorio llevado a cabo. Conforme a lo anterior, solicita declarar como probadas las excepciones planteadas con la contestación de la demanda, por cuanto cada una de las planteadas ha prosperado.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que **la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación**; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984 y 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así mismo **se conocerá en Consulta en favor del Municipio de Medellín**, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar o modificar la decisión de Primera Instancia, en cuanto declaró la existencia de una relación laboral entre la demandante Luz María Gil de Ramos y la Empresa para la Seguridad Urbana –E.S.U.–, verificándose si se demostraron los elementos constitutivos del contrato de trabajo. Así mismo, se analizará la procedencia del reconocimiento de la indemnización por despido; la sanción moratoria y el reajuste de los aportes a la seguridad social; verificándose si fueron bien liquidadas las cesantías, los intereses sobre las mismas y la prima de navidad y si procede modificar el valor de las agencias en derecho impuestas en

Primera Instancia; analizándose si en el presente caso no operó el fenómeno jurídico de la prescripción. Se conocerá en Consulta en favor del Municipio de Medellín.

Encontrando esta Sala de Decisión **procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia**; por las siguientes razones:

1° Vínculo de la demandante con la Empresa para la Seguridad Urbana:

Indica el apoderado de la E.S.U. en su recurso de Apelación, que no está de acuerdo con la decisión de Primera Instancia, en cuanto concluyó que el empleador de la señora Luz María Gil de Ramos fue la Empresa para la Seguridad Urbana; **encontrando esta Colegiatura que no le asiste razón** a sus inconformidades, como se explica a continuación:

Sobre los contratos de prestación de servicios que celebró la parte actora con la E.S.U., establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 3°, que estos contratos **sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados y se celebran por un término estrictamente indispensable**, sin que generen relación laboral³; veamos:

“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

...3°. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, en ningún caso estos contratos generaran relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por un término estrictamente indispensable. ...”

³ “...3°. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, en ningún caso estos contratos generaran relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por un término estrictamente indispensable. ...”

De acuerdo a la norma anterior, los contratos de prestación de servicios para que surjan válidamente a la vida jurídica, deben reunir las características que la norma describe, esto es i) que sean celebrados con personas naturales cuando las actividades contratadas no puedan realizarse con personal de planta; ii) o que requieran conocimientos especializados y, iii) en todo caso, que no exista a cargo de la contratante una posición jerárquica o subordinante desde el punto de vista laboral.

La H. Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1997, mediante la cual analizó la constitucionalidad de la norma en cita, **precisó los requisitos y características del contrato de prestación de servicios**, así:

- *La prestación de servicios* versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.
- *La autonomía e independencia del contratista* desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato.
- *La vigencia del contrato es temporal* y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.

Sin que sea procedente considerar, como contratos independientes de prestación de servicios, cuando se acredita la existencia de las características esenciales del contrato de trabajo; surgiendo entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del mal denominado '*contratista*', en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. Resultando requisito *sine qua non* para esta clase de contratación, que el prestador de servicio disponga de autonomía técnica, administrativa o directiva, lo cual supone un cierto margen de autonomía en la ejecución del objeto convenido; ello anotándose que el contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando se requiere de conocimientos especializados.

El artículo 53 de la Constitución Política señala los principios mínimos que deben ser respetados a los trabajadores, entre otros, el de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y **el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales**, el cual tiene plena aplicación en los casos en que se haya optado por los contratos de prestación de servicios, cuando en realidad se presenta es una relación laboral. Sobre el principio en cita, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, indicó en la Sentencia SL 1903 del 21 de abril de 2021, Radicado 74521: *“Debe recordarse, que esta Sala de la Corte ha resaltado en múltiples oportunidades, que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, constituye un elemento cardinal de nuestro ordenamiento jurídico laboral, el que se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con sustento en el cual los jueces pueden dejar a un lado las formas convenidas por las partes de una relación contractual para darle prevalencia a lo que en verdad acreditan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el negocio jurídico pactado, por lo que si de dichas circunstancias se evidencia el elemento de la subordinación característico de un contrato de trabajo, se impone derivar de ello, las consecuencias jurídicas que prevé la ley”*. Lo anterior ha sido indicado por la H. Corte, igualmente en la Sentencia SL 1081 del 10 de marzo de 2021, Radicado 77321.

Tratándose de entidades del sector oficial, el principio de la realidad sobre las formas tiene consagración legal, en el artículo 3º del Decreto reglamentario 2127 de 1945, estableciendo que, una vez reunidos los elementos constitutivos de contrato de trabajo, éste no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las modalidades de la labor, entre otros. A su vez **el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945**, preceptúa que *“...el contrato de trabajo se presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; corresponde a este último destruir la presunción”*.

En materia laboral, al trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, para que se entienda configurado el contrato de trabajo, a menos que el empleador demuestre lo contrario.

En el asunto debatido, de la prueba testimonial recaudada, compuesta por las declaraciones de los señores Darío de Jesús Gallego Cadavid y José Duván Flórez Flórez, **se constata que la parte actora prestó sus servicios de manera personal como defensora de Espacio Público, realizando labores de defensa, control y vigilancia del espacio público; actividades éstas que realizaba de manera personal y directa sin poder delegar sus funciones a otra persona; debiendo cumplir un horario que le era asignado por sus jefes y que en caso de reiterados incumplimientos al mismo daba lugar a la cancelación del contrato; así mismo, afirma que la demandante estaba bajo la subordinación permanente de unos Jefes, que la instruían en sus funciones, como lo eran, Froilán Zuluaga, Alvear Tabares y Juan Carlos Sierra, quienes laboran para la E.S.U.** Observándose que la demandante no tenía autonomía para el desempeño de las actividades, para las cuales fue contratada; ya que por el contrario, no podía desarrollar su labor en forma independiente, ni con sus propios recursos, así como tampoco podía realizar sus actividades a su libre arbitrio, ni elección del lugar, debiendo acatar la programación de turnos, según lo establecido por sus superiores, así como obedecer las órdenes que se le impartieran, sin poder delegar sus funciones en otra persona.

Afirma el recurrente que la vinculación de la demandante, se hizo por expresa delegación y mandato del Municipio de Medellín; sin que sea cierto que la entidad territorial la ESU, son lo mismo, pues esta última es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que tiene plena autonomía legal, tiene su propio patrimonio y organigrama; que los recursos son del ente territorial, sin tener autonomía para vincular al personal, siendo simplemente un intermediario.

Frente a lo anterior, encuentra esta Corporación que mediante **el Acuerdo 033 de la Junta Directiva de Metroseguridad⁴, se hicieron cambios a los Estatutos de la anterior Empresa Metropolitana para la seguridad Metro Seguridad** y es así como en el artículo 1° dicha razón social fue transformada el 20 de febrero del año 2002, denominándose Empresa para la Seguridad Urbana E.S.U.; modificándose en el

⁴ Folios 327 a 331.

artículo 2° de dicho Acuerdo, el artículo 4° de los Estatutos de la entidad; señalándose que la E.S.U. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado y su misión es el aprovechamiento de los **desarrollos tecnológicos y sistemas integrales de seguridad, operando como agencia logística y con un equipo humano competitivo que contribuye al mejoramiento de la seguridad y calidad de vida de la comunidad**, generando excedentes al Municipio de Medellín y por tanto es claro que, contrario a lo afirmado por la E.S.U., **si era parte de su misión, esto es, de su razón de ser, la seguridad** y observadas las funciones cumplidas por la parte aquí demandante -entre otras, **control del espacio público, manejo y control de ventas ambulantes, etc.-, ajustándose al objeto social ya citado.**

Concatenando lo anterior, con los **convenios interadministrativos**⁵, mediante los cuales se generaron los contratos de prestación de servicios, se constata que en ellos el objeto social, se desarrolla en aras de recuperar el centro y el entorno de la ciudad de Medellín, de ventas ambulantes, como una estrategia para el control y la defensoría del espacio público y por tanto hay un convenio en su momento con Metroseguridad y luego con la E.S.U., donde ésta se compromete con el Municipio de Medellín a desarrollar dichas estrategias; agregándose lo anterior, dentro de los programas señalados por la Secretaría de Gobierno, de conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestales detalladas en el presupuesto aprobado para cada vigencia. Anotándose que al tratarse de una serie de Convenios interadministrativos de administración delegada de recursos, suscritos entre el Municipio y la E.S.U., nos encontramos con que en un primer momento, podría pensarse existen elementos suficientes para hablar de un contrato de *administración delegada*, inmerso dentro de los distintos convenios interadministrativos ya reseñados, dado que se cumplen a grandes rasgos, algunas de las características propias de dicha modalidad contractual, tales como: la determinación de la obra por el contratante, el suministro de los fondos económicos de su parte y la remuneración del administrador en la forma y períodos convenidos, y a su vez, como obligaciones correlativas del mandatario, la obligación de manejar adecuadamente los fondos asignados según lo

⁵ Folios 348 a 421.

pactado, efectuando el correspondiente seguimiento a su ejecución. **No obstante, existen otras circunstancias determinantes**, en conjunto con otra serie de indicios que, a *contrario sensu* de lo recurrido, **desdibujan el acaecimiento de dicha figura jurídica, -de administración delegada- al menos en su más fidedigna expresión, y que obligan a esta Corporación a considerar a la E.S.U. como el verdadero empleador de la accionante, ateniéndonos a lo que se denomina *contrato realidad* y la primacía de éstos con respecto a las formas, conforme a lo establecido por el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 3º del Decreto reglamentario 2127 de 1945.**

Debiendo recordarse que existe el ***mandato con y sin representación*** y de ello se generan consecuencias distintas, es así como cuando es *sin representación*, esto es cuando no se dice expresamente en el contrato, que se actúa a nombre y representación de otro, se asume directamente todas las obligaciones, como ocurre en el presente caso, en donde en los formalmente denominados contratos de prestación de servicios que realizó la E.S.U., nada dijo al respecto; pactándose entre la E.S.U. y el Municipio una administración delegada a través de convenios interadministrativos, ***sin representación***, lo que tiene como consecuencia que en este caso el empleador de la demandante fuera la E.S.U. ya que ese mandato no tiene por qué cobijar relaciones de trabajo con terceros, frente a los cuales además se pactó entre entidades expresamente una cláusula de exclusión de relación laboral; constatándose en el convenio interadministrativo 4600030362 de 2011⁶, cláusula décima sexta⁷ que ***“La ejecución y desarrollo del presente contrato no genera para el Municipio de Medellín ningún vínculo laboral, civil o administrativo con el personal que la ESU, contrate para la cabal ejecución del presente contrato interadministrativo; por tanto, todas obligaciones con el personal destinado al desarrollo del contrato por parte de la ESU, estará a su cargo”***. (Negrillas fuera del texto). Frente a lo anterior, tenemos que según el H. Consejo de Estado en Sentencia del 16 de septiembre del año 2010 Expediente 16605, precisó que con la vigencia de la ley 80 de 1993 **el contrato de la administración delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad: “...Con la vigencia de la ley 80 de**

⁶ Folios 385 a 391.

⁷ Folio 389.

1993 o nuevo estatuto de contratación de la administración pública, el contrato de administración delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan de su artículo 40, en concordancia con los artículos 2º., 3º., 11, 13, 14, 24, 32, 39 y 41 ibidem.; de utilizarse para la explotación de recursos naturales no renovables, deberá someterse a la ley que determine las condiciones para adelantar dicha explotación. Si asume las características de contrato interadministrativo, rige el procedimiento de la contratación directa (artículo 24, numeral 10., letra c.).”

Y unido a lo anterior, se constata en los contratos de prestación de servicios que suscribió la demandante, que **la E.S.U. actuó directamente frente a ella, esto es, convino con ésta en nombre propio y no en representación, ni anunciando que lo hacía como mera intermediario o como representante del Municipio** y dada las cláusulas que se acabaron de mencionar es claro que dentro del convenio interadministrativo se estaba excluyendo al municipio de dicha responsabilidad frente a los contratistas o subcontratistas, que para la ejecución de los convenios interadministrativos contratara la Empresa para la Seguridad Urbana, por tanto es claro, que la relación que se presentó tiene consecuencias y responsabilidades directas frente a ésta.

Así las cosas, **se concluye que existió una relación laboral entre la señora Luz María Gil de Ramos y la Empresa para la Seguridad Urbana –E.S.U.-, antes METROSEGURIDAD, tal como lo estableció el a quo; la cual debe reglarse por las normas que regulan los contratos con los trabajadores oficiales, calidad que ostentó la actora, procediendo, confirmar la decisión de Primera Instancia.**

2º Unidad de contrato:

Aduce el apoderado de la Empresa para la Seguridad Urbana que no está de acuerdo con se hubiera resuelto que la vinculación de la demandante fue una sola y a término indefinido; encontrando esta Sala de Decisión, que no le asiste razón a sus afirmaciones, como se explica a continuación:

En casos como el analizado, ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, máxime cuando se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral. Al respecto ver las Sentencias SL 1851 del 12 de abril de 2021, Radicado 79254; SL 4095 del 13 de octubre de 2020 y la SL 5595 del 4 de diciembre de 2019, Radicado 78492; en esta última indicó: *“En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí acontece. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4816-2015...”*.

En el presente asunto, se constata en la certificación expedida por la Dirección Administrativa y Financiera de la E.S.U.⁸, que contrario a lo aducido por el recurrente, los contratos suscritos con la demandante fueron continuos desde el 1° de abril de 2009 al 30 de abril de 2011; por lo que, conforme lo precisado en la jurisprudencia citada, se está ante un solo contrato, tal como lo estableció el *a quo*. Y en cuanto al extremo final del vínculo, que aduce el recurrente no se demostró; tampoco le asiste razón, ya que en la referida certificación se indicó como fecha de terminación del contrato de prestación de servicios con la E.S.U. el 30 de abril de 2011 y si bien es cierto que la demandante indicó en su interrogatorio de parte que luego de dicha fecha continuó laborando en dicha entidad, explicó lo hizo a través de la empresa de servicios temporales denominada Misión Empresarial, la cual demandó; hecho este que se constató por esta Magistratura en el sistema de gestión de la Rama Judicial, sin que se encuentre desvirtuado el extremo final que se adujo en la demanda, no existiendo duda respecto al extremo final que en este proceso se reclama; procediendo confirmar la decisión en cuanto declaró la existencia de un solo vínculo entre el 1° de abril de 2009 y el 30 de abril de 2011.

3° Salario:

Manifiesta el apoderado de la E.S.U que no está de acuerdo con *que se tome el último salario para la liquidación de cesantías, ya que el régimen de las mismas es el anual*; encontrando esta Sala de Decisión que no le asiste razón en sus inconformidades, toda vez que se constata en el escrito mediante el cual el Secretario General de la E.S.U. dio respuesta a reclamación administrativa⁹, que la demandante durante todo el tiempo de su vinculación, se le pagó como honorarios la suma de \$1.210.000,00; procediendo confirmar la decisión de Primera Instancia en tal sentido.

4° Reajuste de los aportes a la seguridad social:

Sostiene el recurrente, que *en las pretensiones de la demanda no se solicitó el reajuste de los aportes a la seguridad social como se condenó en la Sentencia, sino que la pretensión era el reembolso de lo que ella canceló y que correspondía pagar a la entidad, por lo que en virtud del principio de congruencia el Juez de instancia no puede proferir esa decisión, teniendo en cuenta que en este caso no se cumplen los presupuestos de las facultades extra petita, sin demostrarse los salarios de los años 2009 y 2010, por lo que no procede el reajuste*; frente a lo cual, no son de recibo sus argumentos, toda vez que dentro de los poderes del Juez Laboral, está el fallar *ultra y extra petita*, conforme lo consagrado en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social¹⁰, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados y en el asunto debatido se declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y la E.S.U. que da lugar al pago de los aportes a la seguridad social, con el valor del salario devengado, que en este caso es superior al índice base de cotización pagado por la demandante, quien lo hizo sobre el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, entre los años 2009 a 2011,

⁸ Folio 49.

⁹ Folios 15 a 16.

¹⁰ “ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.”

tal como se constata en la historia laboral¹¹; debiendo ser con el salario realmente devengado de \$1.210.000,00; hechos todos éstos que se encuentran demostrados en el proceso.

Así las cosas, **esta Magistratura confirmará la decisión de Primer Instancia en cuanto condenó al reajuste de los aportes a la seguridad social, teniendo en cuenta el salario realmente devengado por la demandante.**

5° Indemnización por despido injusto:

Aduce el apoderado de la E.S.U. que no hay lugar a la condena de indemnización por despido injusto, por cuanto no se demostró que la relación laboral terminó efectivamente el 30 de abril del año 2011, pues la misma continuó, según consta en “otro proceso”, sin que por tanto proceda una condena de indemnización por despido, no existiendo manera de contabilizar el plazo presuntivo de seis meses; **ante lo cual esta Corporación observa, que como se explicó en acápite anterior, sí esta demostrada la fecha de terminación del vínculo que existió entre las partes y procediendo la indemnización por despido injusto**, ya que la iniciativa para dar por terminada la relación partió de la E.S.U., tal como se constata, tanto de la respuesta a la demanda como de lo indicado por el Secretario de la entidad, en su escrito de respuesta a la reclamación administrativa¹²; por lo cual la demandante si estuvo ligada a la entidad accionada, mediante una relación continua a término indefinido, por lo que aquella tenía vocación de estabilidad; no pudiéndose romper el contrato con el argumento del vencimiento del plazo pactado. Y al no haberse invocado, ni probado una causal legal por parte de la entidad demanda, para la terminación del contrato debe concluirse que el despido de la señora Luz María Gil de Ramos, fue injusto y en consecuencia procedía condenar a la ESU al pago de la indemnización por despido injusto, tal como lo estableció el *a quo*, sin que haya lugar a modificar el valor de la misma, al encontrarse debidamente liquidada.

¹¹ Folios 87 y 88.

¹² Folios 15 a 16.

Así las cosas, **se confirmará la decisión de Primera Instancia, en cuanto condenó al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto.**

6° Indemnización moratoria:

Aduce el apoderado de la E.S.U. que no comparte la decisión del despacho, al considerar era carga del supuesto empleador demostrar la buena fe en su omisión de pagar las prestaciones, por estar ello en contravía de los principios constitucionales que rigen la teoría de contratación de los negocios jurídicos y del mismo espíritu constitucional del ser humano; siendo claro en este caso el actuar de buena fe de la ESU en el trámite de la contratación; encontrando esta Sala de Decisión Laboral que le asiste razón a su inconformidad, como se explica a continuación:

La indemnización moratoria para el caso de los trabajadores oficiales se encuentra establecida en el Decreto 797 de 1949, preceptuando en su artículo 1° que no se considerará terminado el contrato de trabajo antes de que el empleador ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude y que si transcurrido el término de 90 días no se hubieren puesto a órdenes del trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad competente, los contratos de trabajo recobrarán toda su vigencia en los términos de la Ley.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en recientes Sentencias como: SL 293 del 4 de febrero de 2020, Radicado 64252, SL 3552 del 28 de agosto de 2019, Radicado 75832 y la SL 5520 del 10 de diciembre de 2019, Radicado 75627, **ha indicado que la indemnización moratoria no es de aplicación automática y que para su reconocimiento es necesario estudiar, en cada caso particular y concreto, si la conducta omisiva del empleador frente al pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador para el momento de la terminación del contrato, estuvo o no asistida de buena fe y ajena**

a la intención de causar daño al trabajador. Por su parte en la **Sentencia SL 446 del 19 de febrero de 2020, Radicado 75484**, sostuvo que dado su carácter sancionatorio, es preciso auscultar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su conducta omisiva y lo ubiquen en el terreno de la buena fe.

Así mismo en Sentencia SL 312 del 4 de febrero de 2020, Radicado 67122, la Corte señaló que **no existe una presunción de la mala fe del empleador, pues ello resulta contrario a los postulados del artículo 83 de la Constitución Política.** Y en **Sentencia, del 22 de noviembre de 2007, Radicado 30599**, se precisó que por regla general se presume la buena fe y ni siquiera el hecho de no alegarla expresamente es razón para no encontrarla acreditada, bastándole al juzgador que aparezca razonablemente *reflejada*, para que dé lugar a su exoneración.

En el asunto debatido encuentra esta Magistratura que no se vislumbra actuación que permita inferir que la demandada obrara de mala fe, cuando se abstuvo de considerar el nexo, como laboral, como lo aduce el recurrente y por el contrario considera esta Colegiatura que resulta claro, que la ESU tenía la firme convicción de que la relación estaba regida por un vínculo distinto al laboral, según la apreciación que le diera a los distintos documentos, que en el desarrollo de la actividad contratada se expidieron o emitieron y acorde con el sistema de pago que se estableció; situación que sólo se vino a definir al resolverse el fondo de esta controversia, lo que hace que la conducta de la empleadora deba justificarse para ubicarla dentro del terreno de la buena fe.

De igual forma, no puede pasarse por alto que ha sido esta la postura que la entidad ha defendido en sus distintas intervenciones, tanto desde el momento en que dio respuesta a la reclamación administrativa, como en la contestación de la demanda y en la argumentación del recurso de apelación, que si bien, según se ha concluido, no son de recibo para esta Corporación, si se erigen en razones que descartan una actuación asumida de mala fe y además debe anotarse que los procesos que se están

conociendo por esta corporación son todos de la misma época, esto es por contratos terminados a principios del año 2011.

Y debe tenerse en cuenta así mismo, que la entidad demandada, en su momento, hizo uso de los mecanismos legales que como dependencia del sector oficial le confería el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, creyendo poder celebrar con el actor un contrato de prestación de servicios independientes para darle cumplimiento, a su vez, al convenio interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín para administrar la vigilancia, control y capacitación sobre el uso del espacio público en dicha municipalidad, actuando desprovista de la intención de infligir perjuicio al contratista, quien sólo por esta vía judicial logra obtener la declaratoria como, trabajadora oficial en virtud de la aplicación del denominado contrato realidad.

Atendiendo a lo expuesto, **encuentra esta Magistratura que en el asunto debatido no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria establecida en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, procediendo revocar la decisión de Primera Instancia en tal sentido y se absolverá a la E.S.U. de dicha condena; en su lugar se condenará a la indexación**, solicitada en subsidio, ya que constituye un factor que compensa la pérdida de valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, ya que en países inflacionarios como el nuestro, se pierde con el transcurso del tiempo el poder adquisitivo de la moneda y no es lo mismo, por ejemplo una suma en el año 2011, que pagada en la actualidad, la cual se reconocerá desde la fecha de causación de cada uno de los conceptos reconocidos y hasta la fecha en que se haga efectiva su cancelación, de acuerdo con la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$$

Así las cosas, se modificará la decisión de Primera Instancia, revocándola en cuanto se condenó a la indemnización moratoria y en su lugar se condenará a la indexación, de acuerdo a lo explicado.

7° Excepción de prescripción:

Sostiene el apoderado de la parte demandante que ninguna de las prestaciones debió ser afectada por la prescripción, ya que en los casos en que se discute la existencia de una relación laboral por un contrato realidad, la prescripción sólo se cuenta a partir de la fecha del despido; al respecto tenemos que:

En lo relativo a la prescripción en materia laboral, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dispone que ***“Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. ...”***. Y en el caso concreto de los trabajadores oficiales el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, establece en el artículo 102 una prescripción de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible¹³.

La H. Corte Constitucional vía tutela, en la Sentencia T-084 de 2010, referida por el recurrente, acogiendo criterio de Consejo de Estado en el sentido que tratándose del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la existencia de la obligación emanada de la relación laboral y los derechos determinados no son exigibles al momento de la presentación del simple reclamo ante la entidad, sino que nacen a partir de la Sentencia y su exigibilidad desde su ejecutoria.

Sobre el tema se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en las Sentencias SL 1535 del 20 de abril de 2021, Radicado 70738; SL 4260 del 4 de noviembre de 2020, Radicado 49939; SL 1785 del 9 de

¹³ ***“PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.”***

mayo de 2018, Radicado 45984 y del 14 de agosto de 2012, Radicado 41522, entre otras, ha precisado que la decisión judicial de la existencia de un contrato de trabajo, **tiene efectos declarativos y no constitutivos**, dado que reconoce una realidad anterior a la fecha de la providencia, por lo que los efectos de la Sentencia judicial se surten a partir del momento en que nació el contrato de trabajo realidad, pero tales efectos también tienen incidencia en el fenómeno prescriptivo para la exigibilidad de los derechos que de ese contrato se derivan, en los términos consagrados en las disposiciones legales que regulan la materia. En la primera de las providencias citadas se concluyó: *“En ese orden, no es posible predicar que, en razón a la discusión sobre la naturaleza jurídica de una vinculación, sea a partir de la decisión judicial que la define y declara como de carácter laboral, que se hagan exigibles los salarios y prestaciones que de ella derivan, pues este tipo de sentencias son meramente declarativas, no constitutivas.”*

De acuerdo a lo explicado, se acoge por esta Sala la tesis vigente de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, en el sentido de que **la Sentencia de existencia de un contrato de trabajo, tiene efectos declarativos y no constitutivos, dado que reconoce una realidad anterior a la fecha de la providencia** por lo que el término de prescripción de tres años, corre a partir de la causación de cada uno de los derechos pretendidos por lo que al haberse realizado reclamación administrativa frente a las demandadas el 22 de abril de 2014¹⁴, prescribió todo lo causado con anterioridad a igual fecha y mes, pero del año 2011, **tal como lo estableció el a quo, procediendo confirmar la decisión de Primera Instancia.**

Lo anterior, anotándose que en lo relativo a la prescripción de las cesantías, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL 1640 del 26 de noviembre de 2014, Radicado 49347, en que reiteró la Sentencia fechada el 24 de agosto de 2010, Radicado 34393, precisó que el término de prescripción de las mismas comienza a correr a partir del momento de la finalización del vínculo laboral, que es a partir de cuando éstas se hacen

¹⁴ Folios 8 y 11.

exigibles, por lo que en este caso, no prescribe el reconocimiento de las cesantías, tal como acertadamente lo concluyó el Juez de Primera Instancia.

Conforme a lo anterior procede confirmar la decisión, en cuanto declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.

8° Agencias en derecho:

Solicita el apoderado de la parte actora se modifique el valor de las agencias en derecho, toda vez que si las pretensiones están a la fecha en aproximadamente \$125.000.000,00, por salir avante casi la totalidad de las pretensiones, las costas deben ser entre un 20 y un 25%, o sea unos \$25.000.000,00; **encontrando esta Colegiatura que no está llamado a prosperar lo pretendido por el recurrente**, toda vez que una cosa es la condena en Costas y otra la liquidación de las agencias en derecho, en donde han de tenerse en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, **siendo la oportunidad procesal para controvertir el valor de las agencias en derecho**, conforme al procedimiento especial de discusión establecido en el numeral 5° del artículo 366 del Código General del Proceso, **mediante los Recursos de Reposición y Apelación contra el Auto que aprueba la liquidación de Costas; no siendo por tanto este el momento procesal para recurrir el valor de las agencias en derecho.**

9° Consulta:

En el asunto debatido se condenó solidariamente al Municipio de Medellín, lo cual procede, toda vez que el artículo 6° del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, preceptúa que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores a menos que se trate de

labores extrañas a las actividades normales de su empresas o negocio¹⁵. Y el art. 82 de la Constitución Política, establece como un deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público.

En el presente asunto, encuentra esta Colegiatura que en los Convenios Interadministrativos, mediante los cuales se generaron los contratos de prestación de servicios, se observa que en todos ellos se establece como objeto el control y la defensoría del espacio público, funciones estas inherentes a las actividades del Municipio de Medellín como ente territorial, en los términos del artículo 82 de la Constitución Política, quedando claro que las actividades realizadas por la demandante Luz María Gil de Ramo, como Defensora del Espacio Público, no son ajenas en manera alguna a las del ente territorial demandado, siendo por tanto solidariamente responsable en el pago de las condenas, tal como lo estableció el *a quo*.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral confirmará la decisión de Primera Instancia, en cuanto declaró solidariamente al Municipio de Medellín, respecto del pago de las condenas por prestaciones laborales e indemnizatorias; anotándose que se verificó que las mismas fueron bien liquidadas, teniendo en cuenta las doceavas en los conceptos que así lo requerían, tal como se consta en la liquidación que obra en el proceso¹⁶.

Corolario de lo expuesto, se MODIFICARÁ la decisión de Primera Instancia que por vía de Apelación y Consulta se conoce, en los términos indicados en precedencia.

¹⁵ “No son simples intermediarios ni representantes, sino contratistas independientes y, como tales, verdaderos patronos de sus trabajadores, los que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, para realizarlas con sus propios medios y con autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresas o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

¹⁶ Folios 496 a 497.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de la parte demandante al no haber prosperado el recurso de Apelación presentado; fijándose como agencias en derecho la suma de **\$100.000,00**, a favor de cada una de las demandadas; conforme a lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y el artículo 365 del Código General del Proceso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **MODIFICA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación y Consulta se revisa; **REVOCÁNDOSE en cuanto condenó a la indemnización moratoria** para en su lugar **ABSOLVER** de la misma; **CONDENÁNDOSE** solidariamente a las demandadas **a la INDEXACIÓN** de los valores reconocidos a favor de la señora Luz María Gil de Ramos, desde la fecha en que debió hacerse el pago de los conceptos reconocidos, hasta la cancelación efectiva; **CONFIRMÁNDOSE** la decisión en todo lo demás; según lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **CONDENA en COSTAS en esta Segunda Instancia a cargo de la demandante LUZ MARÍA GIL DE RAMOS**; fijándose como agencias en

derecho la suma de **CIEN MIL PESOS M/L (\$100.00,00)**, a favor de cada una de las entidades demandadas; según lo explicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

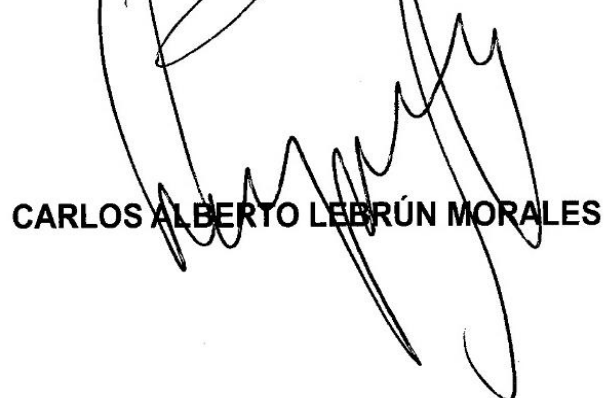
Los Magistrados;



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 114 del 1° de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>